

Por una historia político-cultural de la Revolución Francesa _____

Jorge Cajal

Jean-Clément Martin,
Violence et Révolution.
Essai sur la naissance d'un mythe national,
París, Editions du Seuil, 2006.

Este ensayo es en gran medida una respuesta a quienes relacionaron la violencia con el Terror y presentaron a este como paradigma de la Revolución. La tesis principal de Martin es que la violencia desde abajo fue utilizada por las nuevas elites políticas en proceso de consolidación. La protesta tradicional, que en otros lugares como Inglaterra se situó en los márgenes de la política, ocupó en Francia el centro de la escena. Esto ocurrió desde 1789 y fue creciendo gracias al estallido de la autoridad, a rivalidades personales y a la guerra. La historia de la Revolución es también, por tanto, el intento del nuevo Estado en construcción por controlar y desautorizar la violencia desde abajo para sacarla de la política. Comenzó de forma imprecisa durante el Terror y se consolidó con la llegada de Bonaparte al poder. Las formas de violencia estatal y popular, fundamentales en el desencadenamiento y en el desarrollo de la Revolución, se acercaron mucho más a las prácticas represivas del Antiguo Régimen que a modelos totalitarios del siglo XX.

La violencia y la política

Desde la *guerre des farines* de los años 60 se había acrecentado la desconfianza popular hacia las autoridades, que fueron acusadas de no proteger al pueblo y de matarlo de hambre. Los temores sobre un «complot» se extendieron en este contexto de oposición al *laissez faire* y los grandes propietarios, molineros, panaderos o comerciantes de grano fueron sometidos a presiones de distinto tipo. Los motines entre el otoño de 1788 y la primavera de 1789 por la defensa de una «economía moral» consistieron fundamentalmente en interceptar mercancía, repartir las reservas de ciertos propietarios, enfrentarse a las autoridades o provocar disturbios en el mercado, todo ello con una activa participación de las mujeres. Esta violencia fue controlada y reprimida como siempre: en Bretaña toda persona hallada en el momento de cometer un delito era juzgada allí mismo y ejecutada inmediatamente si era reconocida culpable. Hubo también algunas medidas que hicieron bajar el precio de los granos hasta el restablecimiento de la autoridad, momento en el cual se castigaba a algún pobre diablo con galeras o con la muerte. A veces la autoridad dudaba y la tropa confraternizaba con el pueblo o, por el contrario, la represión era fuerte, sobre todo en lugares con presencia militar. Pero en la primavera de 1789 se quemaron castillos en Provenza, el Midi y el valle del Ródano. En abril, tras un motín de subsistencias, Marsella se dotó de un nuevo ayuntamiento que mantuvo hasta el 22 de mayo. En los motines de Lyon se quemaron registros y se pidió vino para el Tercer Estado a «4 sols», esta vez seguido de una violenta represión. Todo esto no fue consecuencia de lo que estaba pasando en París, pero al producirse en un contexto de debilidad de la autoridad, de debate sobre los estados generales, de redacción de los *cahiers de doléances* o de guerras de panfletos entre «patriotas» y «privilegiados», esta agitación rompió la autoridad de los nobles, en contextos regionales distintos y con distinto fondo: recuerdo de las guerras de religión

entre católicos y protestantes, rechazo o apoyo a Necker, luchas entre nobleza antigua y burgueses contra nobleza reciente, etc. Artesanos, tenderos, pequeños campesinos e incluso domésticos se convirtieron en árbitros de las luchas por nuevas legitimidades .

La toma de la Bastilla fue el resultado de la escalada del conflicto, de rumores sobre concentración de tropas en las afueras de París y de rivalidades entre las mismas. La multitud en la capital también actuó como lo había hecho casi siempre, tomando la calle y quemando puestos de consumos. A la Bastilla llegaron también porque además de ser un símbolo de la justicia real desprestigiada, era una reserva de armas y pólvora. Una vez allí el gobernador Launay será decapitado por Desnot el cocinero, que se convertirá en un personaje popular. Esto todavía podía encajar en un motín del Antiguo Régimen, aunque fuera poco probable. Lo que sí fue radicalmente distinto es que el acto no sólo quedó impune sino que el rey decidió quedarse en Versalles y aceptar las consecuencias de la insurrección. A partir de este momento existía una autoridad complementaria y rival del poder tradicional del rey, otra encarnación de la nación, la Asamblea nacional, que justificaba la violencia y acabó de transformar una revuelta en una revolución. En lugar de ser perseguidos por crimen de lesa majestad y ejecutados, los patriotas salieron legitimados de los días posteriores al 14 de julio. El mismo día 14 y el día 22 la violencia popular se disparó y la Asamblea justificó el linchamiento de acaparadores como una forma de justicia popular. Sólo en Francia las autoridades centrales procedieron de este modo. En los «*Gordon Riots*» de Londres, en junio de 1780, que acaban con la muerte de 185 personas y tienen un carácter eminentemente anti-ricos, las elites protestantes terminan distanciándose de ellos ante el giro clasista del motín. La represión fue violenta y permitió separar a los radicales de los movimientos populares. En Francia ocurrió al revés, al menos hasta 1793. Tras el gran miedo y la abolición del feudalismo, el vacío administrativo dejado por intendentes y gobernadores reales será llenado por iniciativas comunitarias rivales y ambiciosas, que darán lugar a la construcción simultánea de muchos poderes locales que ahora dicen actuar en nombre de la nación, en lugar de apelar a la «costumbre». El motín del día cinco de octubre de 1789 comienza en el ayuntamiento de París y continúa con una marcha de mujeres hacia Versalles que acaban irrumpiendo en la Asamblea. El presidente acompañó a una delegación ante el rey, lo que no impidió una algarada nocturna que acabó con las cabezas de algunos guardias puestas en picas. La reina, refugiada en los apartamentos del rey, fue obligada a salir delante de la multitud. A medio día un cortejo acompañó a la familia real hasta París en medio de la ausencia de las autoridades civiles y militares. El presidente Mounier decidió marcharse a sus propiedades en provincias y terminó por emigrar en 1790...

El peso de las tensiones y tradiciones de conflicto, la falta de agilidad política de la Monarquía y el alto grado de politización del país fueron responsables de la radicalidad de la situación. Ciudadanos excluidos de la vida política legal introdujeron reivindicaciones tradicionales ligadas al honor, a las jerarquías y a las venganzas, a las rivalidades y a los conflictos sociales. Estas capas populares y ciertas elites, que el autor sitúa «fuera de la política», rechazaban el liberalismo, la racionalización, la civilidad urbana y la secularización de las reglas sociales. Enfrente tenían a las clases educadas, impregnadas de bien público, portadoras de una cultura ligada al derecho natural, que querían crear un espacio público político. Todas las alianzas y variaciones posteriores parten de esta situación compleja, que expresa diferentes horizontes de espera. El jacobinismo será pues una corriente de las elites urbanas que se radicaliza poco a poco para intentar responder a ese rechazo del liberalismo, situado en las fronteras de lo

político. En 1789, el *petit peuple* francés agudizó las divisiones de las elites francesas y les obligó a lanzarse a inciertas aventuras. La fuerza pública tenía ahora que impedir no sólo las conspiraciones desde arriba, sino las protestas desde abajo. La violencia ya no era una decisión principesca o simple expresión de la pequeña conflictividad, sino una forma de hacer política, de expresar reivindicaciones. Había perdido tanto el misterio en sus relaciones con el poder como la espontaneidad popular. La especificidad francesa es la entrada del pueblo en política ya que en el resto de países los amotinados o fueron espectadores o tuvieron un papel pasivo. En Francia los mitos movilizadores de la edad de oro o del rey justo se mezclaron con la política y además con éxito. El clima que así se constituyó no fue ni el plan de un grupo homogéneo ni el desarrollo de una doctrina preestablecida, sino el resultado de una serie de conflictos irresueltos.

Las nuevas elites políticas en construcción clasificarán estos motines desde un punto de vista político dependiendo de sus aliados o del momento cronológico de los mismos. El anticlericalismo, los ajustes de cuentas, el justo precio, la quema de castillos o las esperanzas milenaristas serán «revolucionarias» o «contrarrevolucionarias» dependiendo del estado de la lucha entre las autoridades. Las de París, concretamente, se encuentran profundamente divididas. La vía moderada de la Revolución impondrá el rechazo de las agitaciones populares y el monopolio de la fuerza centralizado en los guardias nacionales tras el enfrentamiento en el campo de Marte en julio de 1791, aunque la guerra exterior y la contrarrevolución lo harán imposible. Por su parte la rama más numerosa del club de los jacobinos se ha escindido y los ahora llamados *feuillants* rechazan la república y los movimientos populares. Ahora sólo una minoría jacobina se encargaba de la defensa de la nación, del pueblo y criticaba la moderación. Ellos presentarán la gran agitación en el campo, con bandas que piden tasar precios y asaltan convoyes de grano en puertos como Dunkerke, como acciones legítimas contra acaparadores, aunque haya víctimas patriotas u otros intereses como rivalidades entre industriales. Este estado de cosas no cesará hasta que las leyes satisfagan definitivamente las demandas de los campesinos y se consume la alianza entre estos, los jacobinos y el artesanado de las ciudades. El campo inglés también se vio agitado por una oleada de protestas similar, con demandas de justo precio y productos tasados, pero la plebe no recibió el apoyo de ningún grupo político. En Francia la «economía moral» recibió una interpretación distinta por la coyuntura excepcional. Esta nueva lectura, esencialmente política, cambió su sentido y convirtió a los campesinos y a la plebe urbana en revolucionarios o contrarrevolucionarios dependiendo de sus apoyos y del momento de la revuelta. El caso de la Vendée es paradigmático: fueron las lecturas políticas de episodios de protesta campesina unidas al fracaso estrepitoso de la represión, por la incompetencia y la rivalidad entre las autoridades militares, las que hicieron posible la identificación de la Vendée a la Contrarrevolución. Esto no ocurrió donde la represión fue eficaz, como al norte del Loira, ni en otras zonas con insurrecciones endémicas y muy violentas, como el corredor del Ródano .

La violencia y el Estado

Hasta el momento la violencia desde abajo había sido utilizada por las nuevas elites políticas contra el rey, por los monárquicos contra los revolucionarios y por distintas familias «patriotas» en lucha por el poder. Esta es básicamente la perspectiva con la que analiza el período del Terror. El Estado, a partir de 1792, tendrá que hacer frente a las agitaciones internas y a la guerra exterior con un ejército heredado del

Antiguo Régimen, con las milicias burguesas encuadradas en la guardia nacional y con el cuerpo de voluntarios que desde 1789 había venido reforzando el ejército y sustituyendo a emigrados. Ciudadanos pasivos que no podían entrar en la guardia nacional burguesa, a la que doblaban en número y en entusiasmo revolucionario, alcanzan la cifra de setenta mil en 1792.

Los jacobinos canalizaron estos entusiasmos y se introdujeron como intermediarios entre la cultura de gobierno, propia de las elites de la Convención o de la administración de los departamentos y la espera de una política expeditiva. Están detrás del decreto del 19 de marzo que envía a la muerte a todo el que lleve una bandera blanca o algún arma, nada más conocerse las noticias de que Dumouriez se ha pasado al enemigo. Más que el comienzo del Terror, el 19 de marzo estaba en la línea de la justicia del Antiguo Régimen y sus prácticas represivas, que el nuevo Estado en construcción se resistía a abandonar pese al avance de la guillotina. Los meses sucesivos, especialmente el verano de 1793, han sido presentados como el intento de control jacobino de un país atacado desde el interior y desde el exterior. Estos clichés historiográficos intentan despreciar o ennoblecer a una minoría radical que sería, o bien responsable de todos los males, o heroica. París estaría unido en torno al Comité de Salud Pública y de la Convención, que aceptarían la dura tarea de salvaguardar la Revolución pagando el precio de aceptar la violencia. Esta visión es falsa, no es capaz de explicar lo que ocurre y legitima dos formas de interpretación antagónicas que presentan la Revolución como modelo de progreso asediado por la reacción o como preludio de un estado totalitario. El periodo se caracterizó en cambio por la urgencia, por la autoridad confusa y múltiple, por el extraordinario número de actores políticos y por un espacio institucional mal delimitado que facilitó la legitimidad de la violencia. En esta situación, los hombres que se situaron en el primer plano político estaban lejos de controlar el poder. Luchaban por él y lo compartían con otros actores y con otras instituciones encargadas de la defensa nacional. Desde el 10 de agosto y las masacres de septiembre, la importancia de las secciones, de las asambleas primarias y de los clubes no había dejado de crecer en todo el país, donde se supone que paliaban la ausencia de autoridad. Los convencionales, por ejemplo, enviarán a representantes en misión para supervisar la leva en masa, pero estos se encontrarán a menudo con otros enviados que se sienten también portadores de legitimidad como representantes del pueblo en defensa de la nación. Esto abre la vía a un nuevo personal político de extracción popular no siempre democrático, a veces incompetente y otras decididamente indigno. Identificaron a poblaciones descontentas con la reacción y dejaron paso a actos de violencia brutal cometida bajo supuestos políticos. Los diputados de la montaña y del centro tuvieron responsabilidades en esto porque volvieron en su provecho las reivindicaciones de las secciones de París y encarnaron una línea política que identificó claramente la violencia más atroz con las medidas más eficaces de salud pública.

Durante el Terror, la violencia tuvo varias caras. Aunque no existió traducción jurídica ni política del mismo, este sí existió por iniciativas individuales y acciones de grupos armados. En este sentido la represión afectó a regiones profundamente divididas por conflictos internos de origen político, social o religioso y en mucha menor medida a aquellas más o menos reunidas en torno a sus elites tradicionales. En París los miembros de la Convención intentaron impedir el éxito *sans-culotte* y *hébertiste*. Consiguieron sortear algunas de sus demandas e ilegalizaron a los más extremistas. El ejército revolucionario, destinado a la supervivencia económica del país, era menos que lo que esperaban las clases populares, que no obtuvieron las guillotinas que querían. No se

opusieron a los extremistas, pero los intentaron controlar y no seguir la política de control de precios. Los cabecillas *enragés* fueron perseguidos y se prohibió su club en octubre, aunque el comité de Salud Pública concedió a los *hébertistes* la ejecución de 21 girondinos, Mme. Roland o la reina. Por estas maniobras el comité consigue el 10 de octubre controlar el consejo ejecutivo y sus ministerios, haciendo promulgar el gobierno revolucionario hasta la paz el 4 de diciembre. Como vemos la incapacidad de las elites revolucionarias para afrontar la realidad de la violencia popular autónoma, manifiesta en 1789 como en 1792, continuó en 1793. Más que la creación de un sistema, el Terror fue una manipulación de hombres y de opiniones que estaba saliendo bien.

Durante la Revolución, y no sólo durante el Terror, el espacio público se llenó de venganzas, delaciones y arbitrariedades, y esta realidad, trivial para los historiadores de las ideas, fue el marco en el que vivieron los franceses de la época, que apoyaron en su mayoría la marcha de la Revolución, a menudo por razones prácticas como los cambios en el derecho social o familiar. Violencia y política formaban una pareja complicada, con voluntad de actuar por sí mismas de forma independiente. Un ejemplo claro son algunas secciones del ejército revolucionario, compuesto por artesanos y tenderos, que acaban cometiendo actos de barbarie contra población civil. Estos rituales violentos contrastaban fuertemente con la voluntad parisina de racionalizar la violencia en torno a la guillotina. Para el autor, insistir sobre la complejidad de los mecanismos no significa diluir la realidad de la violencia. En otoño e invierno de 1793-1794 la Convención y los Comités impulsaron acciones y orientaciones generales, vigilaron ministros y eligieron comisarios para aplicar medidas en París y en provincias, pero en esta organización compleja es imposible ver la figura de un dictador como Robespierre o de «doce tiranos minúsculos» como dice Robert Palmer. Había contrapoderes en la Asamblea, en los Comités de Gobierno, en el de Salud Pública, en la administración ejercida por los representantes en misión o en las innumerables instancias nacionales, departamentales y locales donde actuaron individuos inscritos en redes políticas variadas y con sensibilidades diversas. No hubo en consecuencia ni captación del poder ejecutivo por el legislativo ni instauración de un régimen autoritario, sino impulso por parte del Comité de salud pública de principios políticos. La situación era aún inestable, con feudos contrarrevolucionarios, descontento popular y debates sobre la orientación de la guerra. En definitiva, habían conseguido el poder formal pero les faltaba el control práctico de las administraciones y del ejército.

Las consecuencias de este periodo confuso que los historiadores han llamado «Terror» fueron decisivas para la cultura política francesa: la contrarrevolución identificó al enemigo y a quienes podían luchar por la defensa del país. Las victorias en el interior y el exterior legitimaron una revolución reducida al mantenimiento de lo conseguido y al establecimiento de un estado fuerte que garantizase la unidad. Finalmente aumentó el nacionalismo y disminuyó el cosmopolitismo identificado con los girondinos.

Thermidor inauguró una nueva relación entre violencia y política. Mantuvo, aunque renovados, tanto los tribunales revolucionarios como los representantes en misión y comenzó la represión contra «la cola de Robespierre» cuya leyenda negra comienza ahora. También salieron a la luz, de forma brutal y sensacionalista, los crímenes de la Vendée, con lo que la violencia se identificó únicamente con el terror jacobino. Pero, aunque con algo menos de violencia, los mecanismos represivos de la etapa anterior se reprodujeron en todo el país, las divisiones en la comunidad eran aún

palpables y la política siguió cubriendo ajustes de cuentas individuales y colectivos. Continuaron, cada vez con más éxito, los intentos de monopolio de la violencia por parte del Estado. El 25 de marzo de 1795 una ley propuesta por Sièyes garantiza la representación nacional contra todo conflicto insurreccional, incluso recurriendo al ejército. Ahora los diputados tendrán incluso poder militar y las manifestaciones de abril de 1795 en París que reclaman «pan y constitución de 1793» serán reprimidas. El 20 de mayo la invasión de la Convención fracasa y como consecuencia se pronuncian 36 condenas a muerte. Las jornadas populares ya no legitiman las decisiones políticas ni expresan la voluntad del pueblo soberano. Se termina definitivamente con la Revolución desde abajo mediante el desarme de los sans-culottes, la licencia de la gendarmería de París y la condena de los participantes en las masacres de septiembre. En este sentido, el giro fundamental de la Francia del año III es que la violencia fue controlada por las elites depositarias del poder legítimo. Pero la violencia dejó huellas irreversibles. Acentuó la rivalidad entre católicos y protestantes en el sureste, creó la región de la Vendée y la identidad regional de vascos, bretones y corsos. El proceso de centralización del ejecutivo continuó hasta el Directorio, que heredó zonas de rebelión abierta y de guerras civiles así como ejércitos movilizados en torno a sus jefes y a entusiasmos políticos rivales. El endurecimiento rápido de la política con respecto a los oponentes muestra bien que se ha abandonado y denunciado el discurso del Terror sin que las políticas represivas cambien. El Estado legisla contra posibles conspiraciones a derecha e izquierda y vuelve a introducir la intención, en la sanción del crimen, al mismo nivel que el crimen mismo. Tras el golpe de estado en septiembre de 1797, la legislación republicana se volvió esta vez contra curas refractarios y emigrados clandestinos y de nuevo aparecieron violencias en zonas de guerra civil. Pero ahora las autoridades republicanas no interpretaron los levantamientos en clave política, sino calificándolos de bandolerismo. Las elites revolucionarias negaron cualquier tipo de conciencia política a las masas campesinas, cualquier espera de mejoras religiosas, económicas o sociales, mientras los notables monárquicos, por su parte, no pensaron de un modo muy diferente. Desde este punto de vista el Directorio despolitizó las luchas pero confirmó que la República debía combatir enemigos permanentes como nobles y clero. En 1795-97 se consolidaron estrategias cínicas de control del poder y de empleo de la violencia que no tenían nada que envidiar a la etapa anterior. Ciertamente se recurrió a prácticas represivas viejas como el mundo, pero extrañaron menos tanto a los observadores contemporáneos como a los historiadores, todos ellos estupefactos ante la irrupción de las masas. Las medidas concretas de esta orientación son bien visibles: ciudades en permanente estado de sitio del 96 al 99, comisiones militares muy rigurosas, endurecimiento de leyes represivas que permiten a tribunales militares juzgar casos de bandolerismo, etc. Posteriormente, el miedo a la Contrarrevolución o a la vuelta del Terror será explotado por los golpistas de brumario de 1799, a cuyo triunfo seguirá una fuerte depuración de republicanos, así como la violencia de las columnas volantes, que en cuatro meses matarán más opositores que las comisiones del directorio en dos años.

A modo de balance

La violencia se convirtió en 1789 en una forma de hacer política porque las masas forzaron a los políticos a actuar y estos la consideraron como una forma legítima de justicia popular contra un rey poco comprensivo. Esto no ocurrió en otros lugares como Inglaterra, donde las clases populares se habían situado al margen de la política y

ningún grupo con cierto poder reivindicó sus acciones. Este tipo de protestas son calificadas por el autor como «prepolíticas» porque no habían saltado las barreras del respeto y la deferencia hacia las autoridades y la violencia no había dejado de ser una característica de la espontaneidad popular. Por su parte la historiografía marxista británica que se ha dedicado al estudio de la protesta preindustrial ha desechado las visiones espasmódicas de la misma e insistido en considerarla como algo organizado, relativamente poco violento y que respondía no sólo a estímulos básicos como el hambre sino que se producía cuando la gente creía que se estaban alterando viejas prácticas de convivencia como el precio justo de los alimentos o su correcta distribución. Fue la defensa de la «costumbre» la que impulsó la protesta, tanto como el hambre. En cambio no existe el mismo consenso a la hora de confirmar su naturaleza política. Para Hobsbawm, por ejemplo, las formas tradicionales de protesta fueron «primitivas» puesto que no contaron con organizaciones, programas y personal específicos que defendieran una idea del ejercicio del poder a nivel nacional. Este parece ser el ángulo desde el cual el autor concibe la política, que contrasta con la opinión de algunos sociólogos norteamericanos especialistas en el análisis de la acción colectiva y de los movimientos sociales. La política es considerada en un sentido mucho más amplio, no depende sólo de organizaciones ni del marco nacional. Se trata en definitiva del proceso de lucha por el poder, en el que participan actores políticos no necesariamente encuadrados en organizaciones formales. Desde este punto de vista, las formas atávicas y antiliberales de protesta francesas fueron perfectamente políticas puesto que contribuyeron a la transformación del régimen de la propiedad. Estos actos formaron parte de la política independientemente de que fueran o no legitimados desde arriba. Por ejemplo, la quema de títulos de propiedad es un acto político, aunque la Convención no hubiese acabado sancionando el final del feudalismo³.

Esta matización inicial no cambia lo que a mi juicio es un pilar básico del libro, es decir, que la política es fundamental en el desarrollo de la Revolución. Las clases populares utilizaron los repertorios que conocían para reivindicar lo que creían justo, como el establecimiento de precios adecuados para los productos de primera necesidad o el fin de la explotación señorial. El porqué estas protestas consiguieron transformaciones revolucionarias en Francia y no en otros lugares hay que buscarlo en la política, aunque para él las clases populares accedan a ella de la mano de las elites. La sociología norteamericana considera también la política como esencial en el desarrollo de los movimientos sociales. Para Tilly ni las teorías derivadas de la desintegración social ni las que analizan los intereses comunes de la gente explican suficientemente la acción colectiva porque no prestan atención «a la estructura política ordinaria y al proceso político rutinario». Sydney Tarrow utiliza el concepto de «estructura de las oportunidades políticas» para el análisis comparado de movimientos sociales en el siglo XX y consiste fundamentalmente en la relación entre los movimientos sociales y el exterior. Las contradicciones en el seno de la sociedad, la organización y la cultura común deben ponerse en relación con la política, que es la que es capaz de transformar el movimiento en acción. Este aspecto es clave para entender la evolución de la historia social desde su «Edad de Oro» en los sesenta hasta nuestros días. La historia económica y social, fundamentalmente preocupada por el análisis de las estructuras, consideraba que eran estas quienes acababan decidiendo la política, definida en términos braudelianos como la «espuma de la historia» y relegada por algunos marxistas, junto con la cultura, al rincón de las superestructuras. Hubo quienes reaccionaron contra el marxismo despreciando absolutamente las estructuras para construir una nueva historia donde lo político y lo cultural, las *mentalités*, se convirtieron en las únicas variables de

la explicación histórica. Pero afortunadamente hubo otros que, sin abandonar los logros de la historia social, incorporaron a estas nuevas perspectivas que permitían seguir situando el conflicto como explicación del cambio histórico. Es el caso de los historiadores británicos o los sociólogos históricos norteamericanos, ya citados, pero también de la herencia de Labrousse en Francia, de la Escuela de Bielefeld y de la historia de la «vida cotidiana» en Alemania o de la microhistoria italiana⁴.

Para Tarrow, «los movimientos sociales se forman cuando los ciudadanos corrientes, a veces animados por líderes, responden a cambios en las oportunidades políticas que reducen los costes de la acción colectiva, descubren aliados potenciales y muestran en qué son vulnerables las elites». Los cambios más destacados en su estructura son la apertura del acceso a la participación, los distintos alineamientos de los gobiernos, la disponibilidad de aliados influyentes y las divisiones en el seno de las elites. Durante el período revolucionario se dieron todos estos ingredientes, con estados generales, panfletos, elecciones, vacilaciones de la monarquía, apoyos políticos a la acción colectiva y diferentes criterios para conducir o frenar la Revolución. En este sentido el Estado ofreció posibilidades para la acción colectiva —todos los Estados las ofrecen—, pero las demandas desde abajo lograron crear otras nuevas porque agudizaron la tensión social e incrementaron la división de las elites⁵.

Otro aspecto fundamental del libro es que la violencia fue el arma con la que el pueblo entró en política. Anteriormente me he referido al hecho de que las clases populares hacían política antes de la Revolución y fuera de Francia, sólo que en Francia lograron cambiar la estructura de oportunidades políticas. Estos hechos políticos no fueron siempre violentos y quizás sea un tanto impreciso hablar exclusivamente de violencia y revolución porque estoy convencido de que la misma gente, los mismos protagonistas, participaron en acciones violentas y en otras que no lo fueron en absoluto. Habría que determinar entonces cuáles fueron los resultados de iniciativas violentas y no violentas. Por ejemplo los motines o la quema de castillos fueron llevados a cabo por gente que, además, se había negado a pagar las rentas señoriales, y todo ello contribuyó a acelerar el proceso revolucionario. Otro factor importante sería el grado de implicación del Estado. Muchas veces la violencia era consecuencia de la incapacidad o de la negativa de este para negociar, porque los acontecimientos que acababan en violencia no comenzaban de forma distinta que los que no acababan así. Las formas reactivas de acción colectiva —revuelta fiscal anti-quintas, motín de subsistencias—, de defensa de derechos tradicionales que se ven contestados, son siempre violentas porque las peticiones no funcionan y exitosas a corto plazo —huída del recaudador de impuestos, jóvenes que se libran del servicio militar...—. Pero «a largo plazo, los tipos reactivos de acción colectiva, cuanto más retrasaron la desaparición de algunos tipos de derechos populares, dieron a algunos grupos una unidad y una experiencia táctica que se aplicó luego a otros tipos de acción colectiva y de vez en cuando —de forma notable en las revoluciones nacionales del siglo XIX—, produjeron coaliciones temporales pero eficaces entre un gran número de gentes corrientes, resueltas a retener sus derechos, y pequeñas elites que se proponían establecer nuevos derechos». En este sentido, no sólo el Estado «aprendía» a monopolizar la violencia o el jacobinismo contribuía a dotar al país de una cultura política concreta, sino que los protagonistas colectivos también estaban aprendiendo y sus experiencias sirvieron, con victorias y derrotas, para seguir oponiéndose a los poderosos⁶.

Hay un aspecto muy interesante en lo que se refiere al análisis de la violencia. Hemos de partir de la base de que el motín preindustrial o la *jaquerie* clásica se desarrollaba con índices de violencia de baja intensidad. A las quemaduras de puestos de consumos o amenazas a molineros tramposos les acompañaban fenómenos de resistencia cotidiana como la caza furtiva, los pequeños robos o la invasión de fincas señoriales para pasto. Estos delitos eran severamente castigados por la justicia del Antiguo Régimen, que incluía interrogatorios con torturas y penas de muerte con varios grados de suplicio. Durante la Revolución francesa este tipo de prácticas violentas se incorporará a la protesta popular, que reproduce los repertorios de ajusticiamiento de la monarquía y especialmente en zonas con un recuerdo vivo de las guerras de religión. En un contexto de fuertes tensiones sociales, de ausencia de autoridad y de construcción de nuevas legitimidades la acción colectiva adoptó formas y grados difícilmente explicables por la historia social tradicional, que apelaba a los agravios seculares y al conflicto de clases. Como hace Martín, es necesaria una explicación cultural de los repertorios de la violencia popular más allá del desarrollo del conflicto de clases. Álvarez Junco llegó a la conclusión de que los obreros que quemaron conventos en la Barcelona de 1909 se lanzaron a la búsqueda de perfumes e hijos secretos supuestamente enterrados en los claustros, porque conservaban prejuicios anticlericales característicos de la vieja cultura campesina. En la Francia de la Revolución, los campesinos o pequeños artesanos que llegaron a poner cabezas de enemigos en picas, estaban reproduciendo viejos fantasmas de las guerras de religión o dejándose llevar por la fascinación de los suplicios aplicados por los verdugos de las ciudades. De nuevo estamos ante un avance en la historia social, que se ha enriquecido en los últimos años con las aportaciones que la cultura puede ofrecer a la explicación de la acción colectiva⁷.

El autor ha decidido superar los presupuestos ideológicos de las dos corrientes historiográficas que se enfrentaron en el último tercio del siglo XX y afrontar una visión desapasionada de la Revolución, donde esta no sea intrínsecamente buena o mala. Por eso respeta y utiliza los análisis que sobre la revuelta popular llevó a cabo la historiografía jacobina, de modo que encontramos referencias constantes no sólo a clásicos franceses como Lefebvre o Soboul, sino incluso a marxistas británicos como Rudé y Thompson que le permiten establecer elementos de comparación. En cambio desestima las motivaciones de clase como desencadenantes primordiales del conflicto y como causa de la Revolución, aspectos decisivos en la construcción de dicha historiografía, desde Karl Marx, Jean Jaurès o Albert Mathiez. La protesta popular se articuló en torno al motín de subsistencias clásico, que salió de su reducto local gracias a la interpretación política del mismo. Las prácticas violentas que el pueblo llevó a cabo durante estos años alcanzaron importantes cotas de brutalidad y se utilizaron también para ajustar cuentas en el seno de la comunidad. La Contrarrevolución no fue un movimiento salido de la connivencia entre campesinos católicos y aislados y sus amos de siempre, y el Terror no fue un fenómeno explicable por las circunstancias extremas que afrontaba el país. En cuanto a la «escuela revisionista», critica sus visiones desde arriba, que consideraban la Revolución como un proceso de unificación de pensamiento, en torno al ideal de soberanía popular, elaborado por logias masónicas, sociedades y salones desde mediados del siglo XVIII. La filosofía de las Luces, y especialmente Rousseau, habría asaltado la Asamblea en 1789, haciendo inviable el ideal democrático querido por la Monarquía e iniciando el camino hacia el Terror, con lo que el concepto mismo de soberanía popular sería la matriz del totalitarismo⁸.

Por último el autor se distancia también del desarrollo extremo de una corriente historiográfica que, bajo la etiqueta de «giro lingüístico», concibe la Revolución como un conflicto básicamente discursivo. Para Keith M. Baker, uno de sus principales defensores, en el periodo hubo «una redefinición radical de las reglas del juego político, iniciada por un grupo relativamente pequeño de personas en Versalles, apoyada por la insurrección de París y luego aceptada de diversas maneras por algunas partes de la nación o impuesta sobre otras. Antes que ninguna otra cosa, fue una revolución de los diputados, conceptualizada por ellos mismos y —dialécticamente— por quienes se les oponían, así como por los observadores de la capital que los veían de cerca, los periodistas, los panfletistas y muchos otros que contribuyeron a articular el significado de las acciones y los acontecimientos y a abrir así un nuevo campo político»⁹.

Martin no llega tan lejos. Si bien concede mucha importancia al análisis de los actores políticos y acepta logros del «giro lingüístico», como el hecho de considerar la dialéctica revolucionario/contrarrevolucionario como una construcción discursiva, cree en cambio en la «carne humana» detrás de los textos y en la importancia de las relaciones sociales, fundamentalmente conflictivas, que hicieron posible la Revolución: «si les idées et les idéologies jouent un rôle essentiel dans le cours des événements, elles n'ont cependant été efficaces que dans la mesure où elles étaient confrontées et mêlées à des pratiques sociales, religieuses, sexuelles, comme à des identités et des héritages régionaux ou locaux, qui les ont parfois instrumentalisées, qui s'en sont souvent nourris et qui les ont parfois transformées»¹⁰.

El concepto de «economía moral» en E. P. Thompson, «La economía “moral” de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII», en *Costumbres en común*, Barcelona, Crítica, 1995, pp. 213-293.

J-C Martín trabajó en la Universidad de Nantes y ha dedicado numerosos trabajos al estudio de la contrarrevolución, como *La Vendée et la France*, Paris, Seuil, 1987. Allí responde a las explicaciones de Bois, Soboul, o Tilly, para quienes el contexto geográfico o las estructuras económicas y sociales de la región durante el Antiguo Régimen estarían detrás de la insurrección.

³ La costumbre como motor de la protesta en E. P. Thompson, op. cit. Rudé critica las visiones espasmódicas del motín en *La multitud en la historia*, Siglo XXI, Madrid 1979. Hobsbawm expresa su visión de la política en *Rebeldes Primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX*, Ariel, Barcelona 1968. La crítica al concepto de «prepolítico» puede verse en Charles, Louise y Richard Tilly, *El siglo rebelde, 1830-1930*, PUZ, 1997, p. 33.

⁴ La reflexión sobre la estructura política es de Tilly, op. cit. p. 37. La «estructura de oportunidades políticas» es analizada por Tarrow en *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Alianza Universidad, Madrid, 1997. La «Edad de Oro» es de Julián Casanova, *La historia social y los historiadores, ¿Cenicienta o princesa?*, Barcelona, Crítica 1991.

⁵ Tarrow, op. cit. p.49.

⁶ El entrecomillado es de Tilly, op. cit. p. 328.

⁷ El ejemplo español es de Álvarez Junco, *El «Emperador del Paralelo». Alejandro Lerroux y la demagogía populista*, Alianza Editorial, Madrid, 1990.

⁸ François Furet, *Pensar la Revolución francesa*, Barcelona, Petrel 1980.

⁹ La Revolución como discurso en Keith Michael Baker, «El concepto de cultura política en la reciente historiografía sobre la Revolución Francesa», *Ayer* n° 62, 2006 (2), pp. 89-110. p. 100.

¹⁰ Jean-Clément Martin, *Violence et Révolution*, Seuil, Paris, 2006, p. 11-12.